
**Por un error técnico este boletín se envió incompleto y defectuoso.
Pedimos perdón a todos nuestros suscriptores y enviamos ahora la versión completa y
correcta. ¡Gracias por su comprensión!**

BOLIVIAPRESS 1999 – N° 7
(24 de agosto de 1999)

Responsable: CEDIB en el marco del programa INFOBOLIVIA

En este boletín:

I NOTICIAS COMENTADAS

1. Las crecientes complicaciones del caso Diodato
2. Dirigentes petroleros negocian privatización de YPF residual
3. Conflicto de difícil solución entre Gobierno y alcaldías
4. Trágico incendio en Guarayos
5. Dudas sobre la eficacia de las tropas de EE. UU. en el Chaco
6. Exbanqueros a punto de beneficiarse con fallo inicuo de juez

II. TEMA DE ANÁLISIS: La minería, entre la reactivación y la masacre

III. MISCELÁNEA

I. NOTICIAS COMENTADAS

1. LAS CRECIENTES COMPLICACIONES DEL CASO MARINO DIODATO

LOS HECHOS. Mientras la FELCN no acaba de encontrar pruebas fehacientes que inculpen al italiano de delito de narcotráfico (pese a que ya está sometido a proceso por la Ley 1008 y se ha iniciado la incautación de sus bienes), se ha podido evidenciar al menos tres temas que complican la situación: primero, que la tarea de espionaje telefónico no sólo afectó a la propia FELCN sino también a las autoridades de gobierno, e incluso al Presidente de la República (responsabilidad que recae en el Gral. Iriarte, en su calidad de Jefe de Inteligencia, y por el que las FF AA hasta hace poco ponían las manos al fuego); segundo, que las relaciones del jefe mafioso alcanzaban a prestigiosos empresarios cruceños como Rocco Colanzi (problema que llevó a la destitución del Ministro Subirana, que había salido en defensa de dichos empresarios) y a dirigentes políticos de alto nivel como Fernando Kieffer; y tercero, que Diodato había sido favorecido con la adjudicación de enormes cantidades de tierra (se habla de 20 a 100 mil hectáreas), lo que ha llevado a su vez a la destitución del Director del INRA-Santa Cruz, J.Luis Santistevan.

COMENTARIO. Parece ser la 'lógica del poder', y del poder a como dé lugar, la que ha ido complicando la trama mafiosa al interior del aparato del estado y de sus sucesivos ocupantes. Diodato ofrecía control, información, capacitación, en último término poder. Por eso se lo incorporó ilegalmente a las FF AA, se le concedió favores ilegales, y se lo aprovechó para actividades ilegales. Ahora el pez se muerde la cola: bajo presión de la Embajada Americana no queda más remedio que investigar a Diodato, pero la investigación salpica a todos, y deja al desnudo la absoluta falta de garantías constitucionales de un estado que se ha dejado penetrar por la mafia y que a través de sus ministros (de Gobierno e Informaciones) afirma que "no garantiza la privacidad telefónica". Por supuesto, si no puede garantizar la privacidad del Presidente...

2. DIRIGENTES PETROLEROS NEGOCIAN PRIVATIZACIÓN DE YPF RESIDUAL

LOS HECHOS. Los representantes de los trabajadores petroleros están negociando con el Gobierno su participación en la privatización de YPF "residual", donde sus aspiraciones parecen ser la administración del 100 por ciento de las gasolineras y engarrafadoras, y una participación del 60 por ciento de la comercialización de hidrocarburos al por mayor. Al mismo tiempo exigen un bono extra legal de 35 millones de dólares. El Gobierno está negociando, aparentemente con la intención de rebajar dichos porcentajes. Por su

parte la COB ha declarado traidores a los dirigentes petroleros, e incluso discute la posibilidad de su expulsión.

COMENTARIO. Definitivamente estos tiempos de globalización y libre competencia no son favorables para la solidaridad ni el patriotismo. Los trabajadores petroleros, que desde mucho tiempo atrás venían constituyendo un estrato privilegiado dentro del movimiento obrero, y que en su momento pincharon la gran movilización contra la “capitalización” de YPF, hoy nuevamente se aprestan a abortar toda lucha en defensa de las refinerías y demás componentes de YPF residual. Nuevamente ponen sus intereses sectoriales y personales por encima de los intereses del país y de la sociedad en su conjunto. ¡Ojalá no se tengan que arrepentir, como tuvieron que hacerlo a los pocos meses de la entrega de nuestros yacimientos petrolíferos!

3. CONFLICTO DE DIFÍCIL SOLUCIÓN ENTRE GOBIERNO Y ALCALDÍAS

LOS HECHOS. Tras un paro de 24 horas sostenido por más de cien alcaldías municipales del país, y ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, la Asociación de Gobiernos Municipales amenaza con declarar “quiebra técnica” y “desobediencia civil”. Las alcaldías piden que se les desembolse íntegra y puntualmente los recursos de coparticipación tributaria y que se flexibilice los límites que tienen para el endeudamiento. El Gobierno se niega a lo segundo (tras haber consultado con el FMI) pero tampoco está en condiciones de cumplir lo primero (por la franca recesión económica en que parece estar entrando el país).

COMENTARIO. La Participación Popular tenía objetivos descentralizadores y democratizantes, pero evidentemente también pretendía constituir una válvula de escape para las graves presiones en que iba a entrar un país que se estaba deshaciendo de sus recursos naturales y de sus empresas estatales. Al principio la cosa pareció funcionar relativamente bien, pero en economía no hay milagros. Si el estado en su conjunto enflaquece como resultado de la entrega de sus recursos, inevitablemente las células menores del estado, que son los municipios, tienen que sentir los efectos. Hoy la cosa no parece tener arreglo: el Gobierno central efectivamente no dispone de recursos (y los que tiene los despilfarra, por ej. vía Poder Legislativo), y sin esos recursos las alcaldías no pueden seguir funcionando. No hay solución a la vista.

4. TRÁGICO INCENDIO EN GUARAYOS

LOS HECHOS. A mediados de mes se declaró un incendio de inmensas proporciones en la provincia Guarayos (Santa Cruz), más concretamente alrededor de su capital, Ascensión de Guarayos. Se detectó 18 focos de incendio (que llegaban a la zona de Mineros). A dos horas de distancia del incendio el humo hacía arder los ojos. Se quemaron más de 100.000 hectáreas y murieron numerosos animales. Los damnificados, en su mayoría campesinos de la etnia guaraya, suman millares; y la declaratoria de “zona de desastre” (que afecta también a la provincia beniana de Moxos, donde también se produjeron incendios de magnitud) no parece que vaya a mitigar la tremenda desgracia humana, económica y ambiental.

COMENTARIO. Aparte de las graves limitaciones estructurales de la repartición estatal de “Defensa Civil” (cuya imagen además quedó definitivamente dañada con la corrupción comprobada en el caso del terremoto que afectó a Aiquile y Totorá, en Cochabamba), y que en todo caso está pensada para compensar desastres y no para evitarlos, parece que una de las distorsiones más graves que padece la ecología en Bolivia es la inveterada y peligrosa costumbre del “chaqueo” (la quema del monte para poder sembrar en el terreno previamente quemado), costumbre que no provocaba mayores daños mientras se limitaba a formas de sobrevivencia de pequeños grupos selvícolas, pero que ha pasado a ser letal en el momento en que se convierte en práctica masiva de colonizadores poco familiarizados con la selva. Evidentemente la culpa no es de los colonizadores, que a fin de cuentas tienen que ver cómo sobreviven. Pero ¿para qué se inventó el estado si no es precisamente para controlar y equilibrar estos problemas? Sin embargo es evidente que no lo hace.

5. DUDAS SOBRE LA EFICACIA DE LAS TROPAS DE EE. UU. EN EL CHACO

LOS HECHOS. El diputado Offman Blanco (secundado por el Alcalde de Cuevo) cuestionó la desproporción entre las pequeñas obras entregadas por la Embajada norteamericana al Presidente Bánzer y el gran despliegue de 250 efectivos militares durante cinco meses, con sospechosos vuelos nocturnos de los helicópteros sobre la localidad de Boyuibe. De acuerdo al informe oficial los efectivos construyeron 2 aulas y

3 baños en Cuevo, tres escuelitas en Camatindi, Tigüipa y Santa Rosa, una posta en Tigüipa, dos pozos en Aldogonal y Capirenda, un puente de 8 metros en Tartagalito, 20 metros de andenes y 220 metros de ripiado defectuoso en el camino Santa Rosa-El Cruce. El diputado Blanco pedirá un informe oficial, pues cree que no ha habido transparencia en todo este sospechoso proceso.

COMENTARIO. En el número 1 de Bolivia Press ya consignamos las sospechas que albergaban dirigentes del Pueblo Guaraní, y otros muchos ciudadanos/as, acerca de estas extrañas operaciones con un aparato militar desproporcionado. ¿Espionaje para preparar una base militar? ¿Entierro de desechos tóxicos? ¿Asentamiento de bases para el control de la población originaria? ¡Ojalá que el diputado Blanco pueda obtener informaciones fidedignas!

6. EXBANQUEROS SOLICITAN INDEMNIZACIÓN Y JUECES SE LA CONCEDEN

LOS HECHOS. Representantes de los bancos Sur, Cochabamba y BIDESA, que quebraron por un mal manejo de sus recursos y estafaron más de 190 millones de dólares, reclaman indemnizaciones nada menos que por 300 millones. Por su parte la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz reconoció competencia a un juez ordinario para atender demandas contra resoluciones de la Superintendencia de Bancos. Así es como los señores Córdova, Gutiérrez y Landívar habrían sido beneficiados con el dictamen de un juez que según denuncias del Superintendente y del presidente del Banco Central, ha fallado en contra de la ley y por supuesto en contra de los intereses nacionales. Las mencionadas autoridades han apelado ante la Corte Suprema para que revoque el fallo (de lo contrario –dicen-- pagarán los ciudadanos, con menos servicios y más impuestos). El Consejo de la Judicatura afirma que las autoridades financieras han incurrido en un prejuizamiento alarmista. Pero la población no deja de estar alarmada.

COMENTARIO. La tradición del país es que los estafadores y corruptos siempre salen bien parados. Sólo así se explica que los exbanqueros mencionados, no contentos con las millonarias estafas que realizaron (y que han sido pagadas por los contribuyentes), se atrevan encima a exigir indemnización. Los vínculos de estos poderosos señores con algunos representantes del Poder Judicial (y a decir de la prensa, también con el principal partido gobernante) amenaza con convertir el viejo negocio de quebrar bancos en una forma de enriquecimiento definitivamente impune que, como dice el Sr. Jacques Trigo (que ahora se lamenta, pero que arrastra la acusación de haber sido el principal benefactor de los quebradores profesionales), puede poner en riesgo la misma confiabilidad del sistema financiero.

II. TEMA DE ANÁLISIS: LA MINERÍA, ENTRE LA REACTIVACIÓN Y LA MASACRE

El Gobierno anuncia medidas de reactivación

El encuentro “Minería y Construcción Bolivia 1999” arrancó en Santa Cruz el pasado 17 de agosto, con la presencia de más de doscientos empresarios mineros nacionales y extranjeros, y sirvió de escenario para el lanzamiento de una propagandística propuesta gubernamental “para salvar la minería”, que hace meses se debate en una crisis estructural, básicamente por la caída de los precios internacionales.

Algunos de los empresarios presentes en el encuentro (los que pretenden trabajar en la zona Occidental del país) exigían para la fase de exploración una moratoria en los impuestos IVA (Impuesto al Valor Agregado) y GAC (Gravamen Aduanero Consolidado). El ministro Luppó explicó que la idea consiste en beneficiar a los inversores con garantías jurídicas, políticas y sociales, pero además con “medidas imaginativas” que no afecten el régimen impositivo. ¿Qué medidas? El encuentro terminó con más discursos que concreciones, si bien asomó como posible solución la de destinar los montos recaudados por el IVA y el GAC a la construcción de infraestructura carretera.

Se menciona como elementos de la reactivación la inversión privada de 520 millones de dólares en el proyecto de San Cristóbal (Potosí, plata), 55 millones en Don Mario (oro), 40 millones en San Bartolomé (plata y estaño), 28 millones en Capacirca (oro), 8,6 millones en Llallagua/Nueva Esperanza, 5,2 millones en San Simón (oro) y 4,3 millones en San Bernardino (oro). Pero no se explica cuáles serán las medidas que harán posible esa fantástica inversión.

Los decretos de Potosí

En su reunión de Potosí, el Gabinete ministerial sí aprobó algunos decretos concretos:

- Para la viabilización del proyecto San Cristóbal, a cargo de la norteamericana “Apex Silver” (que anuncia una producción anual de 15 millones de onzas de plata, 200 mil toneladas de zinc y 60 mil de plomo; un proyecto de mayor importancia económica que el gasoducto), el Gobierno se compromete a destinar el monto de los impuestos recaudados a obras de infraestructura (camino y electricidad). Sobre los demás proyectos anunciados, parece que la idea es la misma, pero no hay nada concreto.
- Para la reactivación de la minería chica, se decreta la transferencia de la maquinaria archivada de COMIBOL a los mineros chicos y cooperativistas, si bien no se sabe cuál será la instancia apoderada. Al respecto los cooperativistas denuncian esta medida como demagógica, puesto que no soluciona sus problemas; y sólo parece haber servido para que los mineros medianos se quejen de que ellos han sido los olvidados del Plan de Reactivación...

Amayapampa y Capasirca, ¿otra vez un drama humano?

Mientras el Gobierno hablaba de reactivación, la empresa Vista Gold anunciaba el cierre de operaciones en las minas de Amayapampa y Capasirca. No pueden seguir pagando salarios sin producir (el precio del oro no compensa), y despiden a 400 trabajadores.

Los obreros quieren hacerse cargo ellos mismos de la explotación (pese a que los gases venenosos de los socavones ya han terminado con la vida de dos trabajadores), y proponen un contrato de arrendamiento; pero la empresa se niega, e incluso se publican denuncias de que Vista Gold quiere vengarse de lo ocurrido en diciembre de 1996. Por su parte el Gobierno garantiza la propiedad y las inversiones de la empresa americana (que habrían llegado a 10 millones de dólares).

Lo más que ofrece la empresa, tras el cierre de relaciones laborales, es la posibilidad de explotación de reservas de oro “de superficie”, y acepta continuar operando (sólo en Amayapampa) sólo hasta el 30 de diciembre. Los trabajadores declaran que la oferta es una burla y amenazan con medidas de hecho “contra la prepotencia extranjera” que puede derivar en una repetición de la masacre de Navidad de 1996. Los ayllus de Chayanta denuncian que la empresa no ha dejado en la región otra cosa que deterioro ambiental, y respaldan a los mineros. Por su parte un director de COMIBOL acusa a los mineros de estar ahuyentando inversiones.

¿Qué pasa en realidad?

Si los decretos gubernamentales realmente traen aires de reactivación a la minería (y se menciona expresamente nuevas inversiones en Amayapampa y Capasirca) ¿cómo se explica que este drama se siga desarrollando de manera paralela a los encuentros y decretos, como si no pasara nada?

¿No se reducirá todo, como lamentan los mineros medianos, a un acuerdo con la “Apex Silver”, que con el volumen de capital que va a mover puede realmente interesar a los funcionarios de gobierno?

Lo que resulta innegable es que pese al Encuentro de Santa Cruz y a los Decretos de Potosí, la minería en su conjunto (y muy especialmente los trabajadores mineros) sigue abandonada. Y que mientras el estado se limite a invitar a inversores extranjeros a que exploten nuestros recursos, abdicando de su función de promoción directa del desarrollo, tendrá que limitarse también (como ya ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado y en la primera del que está terminando) a satisfacer las demandas insaciables de los empresarios mineros, acostumbrados desde los tiempos de la Colonia a que el estado (¡y la población trabajadora!) están para servirlos a ellos. Masacres incluidas.

MISCELÁNEA

- El gabinete ministerial sesionó en Potosí en un intento de demostrar la preocupación del Gobierno por los graves problemas de dicha región, pese a las declaraciones del Obispo de Potosí, Monseñor Wálter Pérez, quien afirmó que la pobreza no será superada con la presencia del gabinete en la región.
- Las tarifas del transporte público urbano fueron elevadas entre un 11 y un 13 %, por decisión de la Superintendencia de Transportes, decisión que ha motivado encendidas protestas por parte de la población y de las organizaciones populares, sobre todo en La Paz y Santa Cruz.

- La Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz denunció la quema de 35 viviendas campesinas en la zona de Warnes por parte de terratenientes (nacionales y extranjeros) que para ello se sirvieron de grupos paramilitares, equipados con armamento moderno, y también grupos de ayoreos humildes.
- En la quebrada de Los Monos (en el Chaco tarijeño), que ya estaba afectada por los derrames de petróleo, se ha producido también un grave problema de contaminación de gas.
- Las recaudaciones del Tesoro General de la Nación bajaron en 867 millones de dólares en el primer semestre del presente año, dato que preocupa seriamente tanto al Gobierno Nacional como a sus asesores del Fondo Monetario Internacional.
- El Presidente norteamericano Bill Clinton escribió una carta felicitando al Presidente boliviano Hugo Bánzer por el progreso logrado en la lucha contra la producción y distribución ilícita de drogas.

Desde Cochabamba, que todavía respira los aires festivos de la Virgen de Urkupiña, aires que al mismo tiempo han traído resabios de recesión (por la notable disminución de peregrinos de otras regiones del país), les deseamos a todos nuestros suscriptores un grato acercamiento a la primavera...

CEDIB